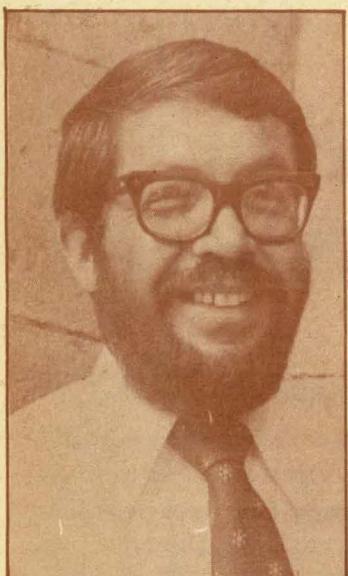


En teléfonos, ¿otro

JUN-9-1982.-

Ciclo Sexenal?

POR MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA



El ya largo conflicto interno en el sindicato de telefonistas de la República Mexicana suscita por varios motivos, grave preocupación. Se está poniendo en práctica allí una peligrosa política de represión contra un modo de actuación sindical que no gusta a muchas personas, por razones diversas, pero que corresponde a las decisiones democráticas adoptadas por los trabajadores, responsables en último término de la marcha de su organización.

A grandes rasgos, lo que está sucediendo allí se resume en las siguientes consideraciones. En abril de 1976, la base de los trabajadores telefonistas se desembarazó de un líder charro, que en ese momento manifes-

taba el carácter típico de esa forma de dominación sindical de dos maneras. Por un lado, se había marchado a hacer campaña para diputado federal en Guerrero, con el obvio descuido que de ello se desprende respecto de los asuntos gremiales. Y, lo que era lo más importante, había signado convenios a espaldas de sus compañeros, no obstante que no era más que un mandatario sujeto a las determinaciones de éstos. Ese género de comportamientos no son, por desgracia, extraños infrecuentes en los medios sindicales mexicanos, aunque no en todos los casos sea posible la generación de reacciones organizadas y exitosas que los extirpen.

En Teléfonos, en cambio, sí ocurrió así. De esa manera, luego de una breve disputa por el poder sindical entre el salustismo sin Salustio, como pudo caracterizarse a una co-

ra. El asambleísmo es una forma corrupta del gobierno democrático, en que los más audaces, o los más hábiles, o los más resistentes, y no quienes tengan razón o representen en verdad las aspiraciones de la mayoría pueden sobreponerse. Pero se trata de un riesgo que debe correrse, so pena de incurrir en el autoritarismo, que es uno de los signos por los que se conoce al charrismo sindical. La democracia sindical es rica en enseñanzas permanentes, porque es la comunidad de trabajo entera, y no sólo dirigentes profesionales los que toman a su cargo las decisiones y el análisis de su aplicación. Pero para la empresa resultó una monserga de la que desde el origen mismo de la situación se propuso desembarazarse.

Una de las manifestaciones de la democracia interna en este caso fue la votación, en varias oportunidades, para llegar a la huelga en un servicio público tan fundamental como lo es la comunicación telefónica. La empresa y las autoridades del Trabajo, encabezadas en ese tiempo por el ahora presidente del PRI, don Pedro Ojeda Paullada, resolvieron que con un sindicato dirigido de esa manera no era posible trabajar, y combatieron a su dirección del modo que hoy enseña algunas de sus últimas consecuencias. Una triple estrategia presidió las acciones conjuntas de autoridades y dirección empresarial: por un lado, obstruir la tarea y aún cuestionar la legitimidad de los representantes a cuya cabeza está Francisco Hernández Juárez; en segundo lugar, presentarlos ante la opinión nacional como simples agitadores; y, en

tercer término, alentar la actividad de corrientes disidentes que es propio exista en todo sindicato democrático.

Hernández Juárez, a su vez, practicó un sistema de alianzas que disgusta, o es incomprendible, sobre todo para quienes sustentan la ortodoxia del esquematismo. Por un lado, mantuvo a su sindicato dentro del Congreso del Trabajo y él mismo estableció lazos de gran cordialidad y cercanía con don Fidel Velázquez. En aquella organización central del movimiento obrero mexicano, Hernández Juárez ha patrocinado aperturas importantes y propiciado que se apoye, por ejemplo, a los promotores del sindicalismo bancario, hasta antes de eso proscritos de casi todas partes. Como cabeza del grupo que apoya a los trabajadores indocumentados mexicanos en los Estados Unidos, el líder telefonista ha formulado planteamientos que pueden servir para normar la conducta pública, aún la gubernamental, en nuestro país, frente a ese problema que de tantas maneras nos concierne.

Pero a últimas fechas, y seguramente al calor de las fricciones internas, que normalmente aumentan si en un ambiente democrático un dirigente está mucho tiempo en el mando (y seis años son muchos en tales condiciones) Hernández Juárez tuvo que hacer alianzas con la corriente de activismo sindical que se llama Línea Proletaria, unida a su vez en otros frentes con esa peculiar central de un solo hombre que se llama Unidad Obrera Independiente, acaudillada por el abogado Juan Ortega Arenas. Enemigo éste irreconciliable, por una parte de Fidel Velázquez, y por otro lado, del sindicalismo de orientación socialista; acaso su virtual presencia en las actividades de los telefonistas ha sido el reactivo que condujo a los últimos acontecimientos.

En efecto, frente a una embestida de la empresa y del gobierno, que incluye despidos y una requisita decretada ilegalmente, pues no había huelga que la explicara, la disidencia ha crecido al punto de tomar el local sindical con apoyos exteriores notorios, así fuera sólo por el hecho de que no se les ha arrojado encima la fuerza pública, como se hizo cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación entró en el local del SNTE en la calle de Belisario Domínguez. No es que reclamemos el uso de los gendarmes para dirimir cuestiones internas en los sindicatos. Lejos de ello. Pero es del caso subrayar el diferente comportamiento oficial frente a un sindicato cuyos líderes se quiere mantener a toda costa y otro a cuya dirección, también a todo precio, se pretende descabezar.

Reiteradamente, los trabajadores telefonistas han acreditado su apoyo a Hernández Juárez. Es cierto que crece y hiere la oposición en su contra. Pero ésta no ha ganado rango mayoritario, y por lo tanto, los golpes de mano que instrumenta son objetivamente contrarios al interés global de los trabajadores. Aunque los líderes de la disidencia tengan fundamentos pertinentes para ella, mientras no actúen del modo previsto por la legalidad interna del sindicato, se ponen al servicio de la empresa.

Ésta es una entidad pública. A pesar de que por mecanismos extraños no se ha convertido todavía en una empresa por completo estatal como Pemex, debe obedecer a las líneas programáticas del gobierno al que pertenece. En su retórica al menos, este gobierno dice sustentarse en el apoyo de los trabajadores, y la menor congruencia que por consiguiente es dable demandarle, es que trate a sus propios trabajadores conforme al modelo que quisiera difundir a toda la sociedad. Y la administración de Teléfonos —acaso porque su cabeza se impregnó de nociones privatistas en sus cursos en el opusdeíta Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas— no lo entiende así, y se entromete en el sindicato para tejer uno que le venga a la medida.

No es Hernández Juárez el que está en riesgo en la confabulación en su contra, y de la que forman parte las embestidas empresariales, el tancredismo gubernamental, la pasividad del Congreso del Trabajo. Es la democracia en un gran sindicato industrial, que se la ganó hace seis años y que no debiera perderla nunca, y menos a causa de intereses mezquinos, la que peligra.